

Talcahuano, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTO:

Que a folio 1 y 5 comparece don JOSÉ FRANCISCO LIRA FERNANDEZ, abogado, con domicilio en Concepción, calle Cochrane N°635, Edificio Centro Plaza, Torre B, piso 13, oficina 1304, en representación de don **LUIS ANTONIO TORRES REYES**, pescador artesanal, con domicilio en Talcahuano, sector Huachicoop, calle Los Helechos N°141 e interpone demanda de cancelación de inscripción de nave pesquera practicada ante la Capitanía de Puerto de San Vicente en contra de don **ARCADIO DE LA CRUZ TORRES REYES**, pescador artesanal, con domicilio en Talcahuano, sector Huertos Familiares, calle Jaime Repullo N°3065, casa 7. Fundada en las siguientes consideraciones de hecho y derecho:

I.- LOS HECHOS:

Hace presente que en la actualidad existe una inscripción respecto de una nave pesquera, en cuya virtud aparece como titular de dominio de la misma su representado, don Luis Antonio Torres Reyes, y el demandado de autos, don Arcadio de la Cruz Torres Reyes, en circunstancias que sólo el primero es el único y exclusivo dueño del respectivo bien.

A.- Respecto de don Luis Antonio Torres Reyes:

Expone que don Ernesto del Carmen Torres Osorio, padre de su representado, administraba en vida tres embarcaciones menores dedicadas a la pesca artesanal. Una de ellas era la lancha pesquera “Ana Luisa”, de una eslora de 18 metros, una manga de 6.04 metros, un puntal de 2,15 metros, un tonelaje de registro grueso de 45,47 toneladas, casco de madera, año de fabricación 1989, distintivo de llamada CB 5395, cuyas matrícula es la N° 364 e inscrita a fojas 64 número 4 en el Registro de Matrículas de Naves Menores a cargo de Capitanía de Puerto de San Vicente, de la comuna de Talcahuano.

Indica que por escritura pública de fecha 12 de julio del año 1999, otorgada en la Notaría de don Renato Laemmermann Monsalves, don Ernesto del Carmen Torres Osorio procedió a transferir en favor de su representado y en favor del demandado de autos, en partes iguales, la nuda propiedad de la embarcación singularizada en el párrafo precedente, constituyendo un usufructo vitalicio sobre dicho bien en su beneficio y en el de su cónyuge doña Ana Luisa Reyes Ávila.



Refiere que por escritura de fecha 27 de febrero del año 2003, su padre le entrega en comodato gratuito la respectiva embarcación, con la finalidad de hacer uso de ella en forma exclusiva para la actividad industrial y comercial que él estime conveniente; dicho comodato se pactó por un plazo de 5 años, renovables tácita y sucesivamente por iguales periodos.

Señala que por escritura privada de compraventa de fecha 23 de noviembre del año 2005, cuyas firmas fueron autorizadas ante el Notario Público de Concepción, don Gerardo Bambach Echazarreta, don Arcadio de la Cruz Torres Reyes procede a vender a su representado "la totalidad de los derechos que por cualquier causa o título le corresponda o pueda corresponderle sobre la embarcación ... especialmente la nuda propiedad que adquirió conjuntamente con el cesionario y que equivale, en la parte que le pertenece, a la mitad o un cincuenta por ciento del total del dominio. En consecuencia queda el cesionario dueño de la nave individualizada en su totalidad, sin perjuicio del usufructo establecido a favor de don Ernesto del Carmen Torres Reyes (sic) y doña Ana Luisa Reyes Ávila".

Comenta que luego del fallecimiento de los usufructuarios (padres de las partes), se consolidó en el patrimonio de su representado el dominio pleno de la embarcación "Ana Luisa", por lo cual ejecutó actos de señor y dueño sobre ella en forma exclusiva e interactuó como tal ante las autoridades marítimas y administrativas.

B.- Respecto del demandado Arcadio de la Cruz Torres Reyes:

Expresa que el demandado, con fecha 29 de Septiembre del año 2014, inscribió en la Capitanía de Puerto de San Vicente el 50% de acciones y derechos sobre la embarcación "Ana Luisa" ya singularizada, y la secuencia fáctica que llevó a esta inscripción es la siguiente:

Menciona que con fecha 23 de Noviembre del año 2005 el demandado vendió, cedió y transfirió a su representado el 50% de los derechos y acciones que tenía de la nuda propiedad de la embarcación pesquera menor "Ana Luisa". Luego el día 28 de Noviembre del año 2005, el demandado le solicita a su representado que concorra con él a la Notaría Miranda de Concepción, con la finalidad de firmar un documento relativo a la embarcación, para ser presentada ante el Servicio de Impuestos Internos, para acreditar que no es dueño de dicha nave, de dicho documento no se le entrega copia alguna.

Cuenta que a fines del año 2014, comienzan a producirse inconvenientes entre su mandante y el demandado de autos, en materia de dineros que éste adeudaba al primero y



respecto de un motor que don Luis Antonio Torres Reyes facilitó a su hermano para que lo utilizara por algún tiempo en su embarcación pesquera “Angelina”. En ese contexto de tensiones, con fecha 21 de Julio del año 2015 el demandado presenta una acción judicial de nombramiento de partidor ante el primer Juzgado Civil de Talcahuano, en la causa C- 2.323-2015, argumentando que es su propósito “poner término a la comunidad que existe respecto de la Lancha Pesquera Ana Luisa, así como de las respectivas artes de pesca, aparejo, redes y equipos asociados a la pesca relativos a la embarcación mencionada, como también la correspondiente cuota o permiso de pesca de la embarcación Ana Luisa, incluyendo también las utilidades o incluyendo los dineros o haberes de la comunidad que se encuentran depositados a nombre del demandado en el sistema financiero”. Dicho libelo le fue notificado a su representado el día 09 de Septiembre del año 2015; el 26 de Octubre del mismo año se llevó a cabo el comparendo de estilo y el 11 de mayo de 2016 se resolvió dicha acción, acogiendo el nombramiento de juez partidor sólo respecto de la embarcación y negándose en relación a los demás bienes.

Señala que con fecha 19 de Noviembre del año 2015, el apoderado de don Arcadio de la Cruz Torres Reyes acompaña en la causa de partición un documento privado denominado “RESCILIACIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EMBARCACIÓN MENOR”, según el cual las partes rescilian el contrato de compraventa respecto de la embarcación “Ana Luisa”, que días antes había firmado el demandado a favor de su representado. Dicho documento fue fruto de un engaño y suscrito por su representado sin que éste conociera realmente su tenor.

Sostiene que el demandado obtuvo maliciosamente que su representado firmara el documento de resciliación, teniendo especial cuidado que éste no tuviera copia del documento, para luego, después de nueve años y 356 días, es decir, sólo 9 días antes de cumplirse los diez años, lo saca a la luz pública y lo presenta como su fundamento en el juicio de nombramiento de partidor.

II.- EL DERECHO:

Explica que en el presente caso, se está en presencia de una doble inscripción sobre una misma nave pesquera, originando que una de ellas sea una simple inscripción de papel, como ocurre con la del demandado. La inscripción obtenida por el demandado se ha materializado al margen de la ley, no solamente por la circunstancia de ser un instrumento falso el contrato de resciliación que originó tal inscripción, sino que además, porque su



representado ha estado en posesión tranquila e ininterrumpida por más de 5 años respecto de la nave, ejerciendo sobre ella los actos de señor y dueño.

Indica que como la posesión de las naves pesqueras se asimila a la posesión de los inmuebles, se le aplican los mismos requisitos de prescripción adquisitiva. De esta manera, estima que la inscripción del año 2005 y vigente en forma exclusiva hasta el año 2014 es válida, y la que obtuvo el demandado es una simple inscripción de papel, porque se refiere a una embarcación que nunca ha poseído y que representa una mera anotación en el registro de la Capitanía de Puerto de San Vicente. En dicho contexto, la inscripción registral, unida a la posesión, da a su representado razón legal para sostener la validez de su inscripción y la ineficacia de la inscripción del demandado.

Finaliza solicitando que en mérito de lo expuesto y las disposiciones legales que cita, se tenga por interpuesta demanda de cancelación de inscripción registral en contra de don **ARCADIO DE LA CRUZ TORRES REYES**, acogerla a tramitación y en definitiva dar lugar a ella, ordenando al Sr. Capitán de Puerto de la Capitanía de Puerto de San Vicente, Talcahuano, que proceda a la cancelación parcial de la inscripción de fojas 64 del libro de Registro de Matrícula de Naves Menores, 4 de la Capitanía de Puerto de San Vicente, Talcahuano, eliminando de ella como propietario a don Arcadio de la Cruz Torres Reyes, quedando en dicho Registro como único propietario don Luis Antonio Torres Reyes, todo ello con expresa condenación en costas.

En el primer otrosí de folio 1 compareció don **JOSÉ FRANCISCO LIRA FERNANDEZ**, en representación de don **LUIS ANTONIO TORRES REYES** y en subsidio para el caso que la acción principal no sea acogida, interpone demanda de declaración de prescripción adquisitiva en contra de don **ARCADIO DE LA CRUZ TORRES REYES**, fundada en las siguientes consideraciones de hecho y derecho:

Expone que su representado reunió en su patrimonio el 100% de los derechos sobre la nuda propiedad de la embarcación naval menor denominada “Ana Luisa”. Esa unificación de patrimonio tuvo su origen en la escritura pública de compraventa de fecha 12 de Julio de 1999, en cuya virtud don Ernesto del Carmen Torres Osorio transfirió a su representado el 50% de los derechos sobre la nuda propiedad de la embarcación, y por escritura privada de compraventa de fecha 23 de Noviembre de 2005, por cuyo mérito el demandado de autos transfirió a su representado el otro 50% de los derechos sobre la nuda propiedad de la



embarcación. La propiedad plena de embarcación se consolidó en el patrimonio de su representado el 26 de enero del año 2006, cuando fallece el segundo de los usufructuarios.

Sostiene que desde el 26 de enero del año 2006, don Luis Torres Reyes poseyó la embarcación naval “Ana Luisa” con ánimo de señor y dueño y realizó respecto de ella actos positivos de posesión, tales como reparación de la embarcación, presentaciones administrativas de embarque, desembarque, pesca, zarpe y todos aquellos actos que sólo el dominio faculta a ejercer a una persona que se considera dueño de un determinado bien.

Menciona que el citado artículo 832 del Código de Comercio, establece un sistema de dualidad título modo para la adquisición de naves, entonces se debe atender a la tradición, que en el caso de los bienes raíces se efectúa por la inscripción del título en el Registro del Conservador respectivo. Para el caso de embarcaciones navieras menores, la tradición se materializa con la inscripción en el Registro de Matrículas de la Capitanía de Puerto competente.

Refiere que si se diera validez al contrato de resciliación, dicho documento queda perfecto con el otorgamiento del mismo, de manera que la falta de inscripción implica que aún no se ha realizado la tradición, pero el contrato tiene existencia válida. Como contrapartida, mientras la inscripción no se verifica, el contrato puede ser perfecto, producir obligaciones y derechos entre las partes, pero no transfiere el dominio, lo que sólo va ocurrir con la tradición. Es la tradición la que tiene la virtud de transferir el derecho real de dominio, y la única manera de efectuarla en el caso de los inmuebles es la inscripción conservatoria, y en el caso de las naves, inscripción en la Capitanía de Puerto, mientras no se inscribe el título de transferencia de dicha nave, ésta permanece en el patrimonio del vendedor.

Dice que el artículo 836 del Código de Comercio establece que “La adquisición de una nave por prescripción se regirá por las reglas relativas a los inmuebles”. Esa norma está en armonía con el artículo 831 del mismo cuerpo legal, toda vez que el primero consagra también a las formas de adquirir del derecho común lo relativo a las naves.

Menciona que su representado ha poseído la nave “Ana Luisa” en condición de señor y dueño por más de 5 años, su título justo arranca del contrato de compraventa de fecha 27 de Febrero del año 1999 y del contrato de compraventa de fecha 23 de Noviembre del año 2005, y desde el fallecimiento de su padre (26 de Enero de 2006) ha ejecutado en dicha nave las facultades de uso y goce, estando durante todo ese tiempo de buena fe.



Concluye solicitando que en mérito de lo expuesto y las disposiciones legales que cita, se tanga por interpuesta demanda de declaración de prescripción adquisitiva en contra de don ARCADIO DE LA CRUZ TORRES REYES, ya individualizado, acogerla a tramitación, y en definitiva dar lugar a ella en todas sus partes, disponiendo que don Luis Antonio Torres Reyes es dueño, por prescripción adquisitiva, de la embarcación naviera menor denominada “Ana Luisa” ya singularizada, ordenando al Sr. Capitán de Puerto de la Capitanía de Puerto de San Vicente, Talcahuano, que proceda a la anotación o subinscripción de la sentencia definitiva que se dicte en autos al margen de la inscripción de fojas 64 número 4 en el Registro de Matrículas de Naves Menores a cargo de Capitanía de Puerto de San Vicente, de la comuna de Talcahuano, a fin que la Matricula N° 364 e inscripción referida a la embarcación “Ana Luisa”, queden a nombre exclusivo de don Luis Antonio Torres Reyes, todo ello con expresa condenación en costas, en caso de oposición.

En el segundo otrosí de folio 1 comparece don JOSÉ FRANCISCO LIRA FERNANDEZ, en representación de don **LUIS ANTONIO TORRES REYES** e interpone demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de don **ARCADIO DE LA CRUZ TORRES REYES**, fundada en las siguientes consideraciones de hecho y derecho:

I.- LOS HECHOS:

Reitera todos los fundamentos de hecho ya expuestos en lo principal y primer otrosí de su presentación y que sean atingentes a esta acción indemnizatoria a fin de evitar reproducciones inoficiosas.

Sostiene que el demandado, con engaño hizo suscribir a su representado un documento denominado “Resciliación de contrato de compraventa”, del cual nunca se supo su tenor, guardándolo celosamente por casi 9 años, para ser presentado en la Capitanía de Puerto de San Vicente en septiembre de 2014. Luego el día 19 de noviembre de 2015, a tan sólo 9 días de completarse los 10 años desde el otorgamiento de dicho documento, lo presentó en juicio sobre nombramiento de partidor. Lo anterior muestra que el demandado esperó 10 años para sacar a la luz el documento que con engaño hizo firmar a su representado, para tener la certeza que ese instrumento sería inatacable jurídicamente en cuanto a su validez.

Indica que el demandado, conocedor de la Ley de Pesca y de los derechos de cuota de pesca, sabía claramente que si una persona natural tiene asignada una cuota de pesca,



es indispensable que sea propietario o armador exclusivo de una embarcación naval menor y que esa situación de exclusividad se debe reflejar en el certificado de navegabilidad y en el certificado de matrícula de tal embarcación. De lo contrario, no sólo se pierde la cuota de pesca respectiva, sino que se produce la caducidad de la inscripción del pescador o de la nave del Registro de Pescador Artesanal a cargo del Servicio Nacional de Pesca. El demandado no tuvo ningún reparo ni límite para poner a su representado en la situación fáctica descrita precedentemente.

Señala que es de absoluto conocimiento del demandado, que para que una embarcación naviera menor pueda zarpar para hacer uso de la cuota de pesca que tiene asignado el propietario o armador, es indispensable contar con el certificado de matrícula que al efecto entrega la Capitanía de Puerto respectiva. Como el demandado presentó el documento de resciliación ante la Capitanía de Puerto de San Vicente en Septiembre de 2014, no sólo logró incorporar su nombre en la inscripción de la embarcación “Ana Luisa”, sino que además obtuvo que esta entidad le entregara el certificado de matrícula. Dicho documento lo guardó para sí, en circunstancias que la ley exige que se mantenga al interior de la embarcación, y negó persistente y contumazmente las peticiones que su representado le hiciera en múltiples ocasiones, impidiendo que éste pudiera zarpar en los años 2015 y 2016. Era tanta la necesidad legal y económica de zarpar de su representado, que buscó el camino de pedir un duplicado ante la Capitanía de Puerto de San Vicente por extravío de la matrícula. Tal conducta la adoptó el día 05 de Abril de 2016 y resulta que, al día siguiente, el demandado presentó un documento ante esa autoridad marítima expresando que el documento no se había extraviado porque él lo tenía en su poder. De la forma anterior, obtuvo su propósito de evitar que la Capitanía otorgara el duplicado que permitiera el zarpe y posterior captura de especies marinas.

Cuenta que esta persistente negativa llevó a su representado a hacer uso de la vía judicial, mediante una acción innominada, para obtener que un tribunal de la República lo obligara a entregar el certificado de Matrícula, fue así que la causa comenzó a tramitarse bajo el rol C-653-2017, radicada en el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, en cuya audiencia de contestación y conciliación, el demandado continuó con su negativa de entrega de dicho documento. Situaciones judiciales ajenas a la voluntad del demandado, ocurridas antes de la audiencia de estilo, permitieron que su representado pudiera zarpar y capturar, por lo que con fecha de hoy, y por haber perdido oportunidad la respectiva acción, su representado se desistió de la demanda.



Refiere que sabe el demandado que para tener derecho a la mantención de cuota de pesca de su representado y evitar que la embarcación “Ana Luisa” sea incorporada en la lista de embarcaciones activas en causal de caducidad, es sine qua non que el certificado de navegabilidad tenga vigencia con un solo propietario. Esto había ocurrido ininterrumpidamente desde el año 2005 y hasta el año 2014, época ésta en que por última vez su mandante presentó dicho certificado, en que él aparecía como único propietario, sin embargo, no pudo presentarlo durante los años 2015, 2016 y 2017, pues de haberlo hecho así, se perdería en forma inmediata la cuota de pesca. Lo anterior tuvo la consecuencia querida, buscada y esperada por el demandado y que trasunta en que el día 25 de Abril del año en curso, la embarcación “Ana Luisa” aparece en lista de causal de caducidad por el tema de la vigencia del certificado de navegabilidad.

II.- EL DERECHO:

Manifiesta que los hechos expuestos precedentemente, permiten fundadamente sostener que la conducta desplegada por acción y por omisión del demandado ha constituido un ilícito civil, generándose una responsabilidad en el carácter de extracontractual, debiendo en consecuencia indemnizar a su representado los perjuicios que su antijurídico proceder le ha causado.

Sostiene que en autos se cumplen a cabalidad los presupuestos exigidos por la ley, para hacer surgir a la vida del derecho la responsabilidad extracontractual de don Arcadio de la Cruz Torres Reyes, toda vez que el daño sufrido por su representado con ocasión del proceder contrario a ordenamiento jurídico ejecutado por él, reúne las condiciones necesarias para pretender el resarcimiento.

Añade que su representado ha sufrido un daño de orden patrimonial y moral que debe ser indemnizado por la demandada:

1.- Daño Patrimonial, que está representado por el daño emergente, ascendente a la suma de \$10.000.000.-, y el lucro cesante, esto es, lo que dejó de percibir con motivo de la ilicitud del demandado, equivalente a \$30.000.000.-, durante el año 2015 e igual suma durante el año 2016.

2.- El daño moral, el cual es incuestionable dados los hechos acontecidos, el cual valora en la suma de \$30.000.000.-.



Termina solicitando que en mérito de lo expuesto y las normas legales que señala, se tenga por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de don **ARCADIO DE LA CRUZ TORRES REYES**, ya individualizado, acogerla a tramitación, y en definitiva dar lugar al libelo, condenándolo al pago de \$10.000.000 (diez millones de pesos), por concepto de daño emergente, \$60.000.000 (sesenta millones de pesos) por concepto de lucro cesante, y a la cantidad de \$30.000.000 (treinta millones de pesos) por concepto de daño moral, o, EN SUBSIDIO de las cantidades señaladas, a las sumas mayores o menores que en justicia y equidad se determine conforme al mérito del proceso, todo ello con sus reajustes desde la fecha en que se dicte sentencia y hasta la de su pago efectivo, con expresa condenación en costas.

A folio 5 la parte demandante rectifica la demanda incoada a folio 1.

A folio 17 se notifica personalmente la demanda al demandado.

A folio 26 la parte demandante evacuó el trámite de la Réplica.

A folio 28 la parte demandada evacuó el trámite de la Dúplica.

A folio 37 se llevó a cabo audiencia de conciliación.

A folio 40 se recibió la causa a prueba y se fijan los hechos a probar.

A folio 147 el Tribunal citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA OBJECCIÓN DE DOCUMENTOS:

PRIMERO: Que a folio 1 y 2 del cuaderno de objeción de documentos, el demandado objetó la prueba documental acompañada por el actor a folio 115 y 124, consistentes en:

1.- seis documentos acompañados bajo el N°2 del escrito de la contraria, individualizados como Comprobantes de liquidación de pesca emitidos por la empresa Orizon S.A., por ser falsos.

2.- Documentos singularizados con los números 3, 4 y 5, denominados acuerdo privado relativo a la pesca, por ser falsos.

3.- Los documentos singularizados con los números 6 y 7, denominados anexo de contrato de suministro de pesca, por ser falsos.

4.- El documento singularizado con el número 11, denominado contrato de compraventa de bienes muebles, por ser falso.



5.- Documentos acompañados bajo el N°1 y N°2 del escrito de la contraria, individualizados como Informe de inclinación y estabilidad de la nave Ana Luisa y el Informe Tributario del contribuyente Luis Torres Reyes, por ser falsos.

Finaliza solicitando que en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en el N°3 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, se tengan por objetados los documentos acompañados por la contraria, por ser falsos.

SEGUNDO: Que la parte demandante no evacuó el traslado conferido respecto de la objeción de documentos planteada.

TERCERO: Que la parte demandante rindió prueba testimonial, declarando don Genaro Alberto Navarrete Cartes y don Víctor Manuel Sanhueza Sandoval, testigos hábiles, no tachados, los que previamente juramentados y luego de exhibidos y revisados los documentos objetados exponen:

1.- El testigo Alberto Navarrete Cartes, señala que los documentos consistentes en Liquidaciones de Pesca, emitidas por Orizon S.A. y firmadas por el administrativo de dicha pesquera, son verdaderos, por cuanto ellos trabajan a la parte, esto es, 60% para el dueño y 40% para ellos, sacando todos los gastos. Como representante de la tripulación por más de 15 años ha acompañado a don Luis Torres a recibir las facturas de pago de la pesca que entregan mensualmente, ve que las toneladas corresponden a las que ellos entregan.

Indica que los documentos denominados acuerdos privados de pesca son verídicos, por cuanto cada vez que entrega la cuota de pesca anual, la pesquera se encarga de hacer un contrato con el armador para asegurar el pescado, para que no se lo entreguen a otra pesquera. Dichos documentos están firmados por don Luis Torres Reyes, dueño de la pesca y el representante de la pesquera Orizon S.A.

Manifiesta que son verdaderos los documentos denominados anexos de contrato de suministro de pesca, por cuanto son anexos al contrato anterior para asegurar los meses de pesca, así la pesquera les da bonos de incentivo por pesca en menor tiempo la cuota.

Refiere que el documento denominado compraventa de bienes muebles son verdaderos, porque ellos compraron un sonar, por cuanto el que tenían era de poco alcance. Un pescador se los vendió en \$8.000.000.-.

Menciona que el documento denominado Informe de inclinación y estabilidad de la embarcación Ana Luisa, por cuanto estuvo presente cuando se hizo el trabajo de estabilidad que realizó un inspector de la armada el año 2016. Está firmado por don Marcelo Gajardo Meneses, ingeniero en construcción naval y por el Inspector de la Armada de Chile que revisó el trabajo.



Añade que el documento denominado informe tributario del contribuyente Luis Torres Torres, es verdadero, porque le consta que la señora Lorena Molina es la contadora de don Luis Torres desde el año 2003 a la fecha de su declaración.

2.- El testigo Víctor Manuel Sanhueza Sandoval, declara que los documentos denominados comprobantes de liquidación de pesca emitidos por pesquera Orizon S.A. son verdaderos porque don Luis Torres le entregaba la pesca a esta pesquera y dicha pesquera le entregaba a don Luis un documento con el detalle de tonelaje, la especie y el total. Con eso don Luis le pagaba a sus tripulantes el 40% de la venta. Las firmas corresponden al jefe administrativo, administrador, el representante de la pesquera Orizon.

Comenta que los documentos denominados acuerdo privado de pesca son verdaderos, ya que la pesquera Orizon hizo un contrato con Luis Torres para comprar toda la pesca que saque de Ana Luisa.

Expresa que los documentos denominados anexo de contrato de suministro de pesca son verdaderos, por la misma razón que los anteriores.

Dice que es verdadero el documento denominado contrato de compraventa de bienes muebles, porque dichos documentos los vio cuando compraron el sonar de mayor alcance.

Indica que es verdadero el documento llamado informe de inclinación y estabilidad de la embarcación Ana Luisa, porque el año 2016 como no se pudo trabajar, don Luis Torres tomó la embarcación para hacerle mantención y pidió a un ingeniero naval que la revisara, por la autoridad marítima. En dicha ocasión vio ese documento firmado por don Marcelo Gajardo Meneses, ingeniero en construcción naval y al inspector de la Armada de Chile.

Señala que es verídico el documento llamado informe tributario del contribuyente Luis Torres, porque él acompañó a don Luis a buscar ese documento.

CUARTO: Que en aras de resolver las incidencias planteadas, el tribunal tiene en consideración, que la objeción de documentos deberá fundamentarse y tener en sus bases en los siguientes elementos: a) debe objetarse ya sea por falsedad o falta de integridad; y b) debe indicar los hechos o elementos que constituirían en un determinado instrumento la configuración de las causales de falsedad o falta de integridad.

En el caso de marras, la objeción planteada se sustenta en la falsedad de los documentos ya señalados en la motivación primera, sin perjuicio de ello, no se indican los hechos o elementos que constituyen la falsedad de dichos documentos, así como tampoco se allegó a la causa prueba alguna con el fin de acreditar la falsedad que se alega, motivos



suficientes para rechazar la objeción planteada, como se dirá en la parte resolutive de esta sentencia.

A mayor abundamiento, la testimonial del actor reseñada en el motivo anterior, indica que los documentos objetados son verdaderos, lo cual reafirma la conclusión anterior,

EN CUANTO AL FONDO:

QUINTO: Que a folio 1 comparece don JOSÉ FRANCISCO LIRA FERNÁNDEZ, en representación de don **LUIS ANTONIO TORRES REYES**, e interpuso demanda de cancelación de inscripción en contra de don **ARCADIO DE LA CRUZ TORRES REYES**; en el primer otrosí de su escrito, EN SUBSIDIO, demanda de prescripción adquisitiva; y en el segundo otrosí de su presentación demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, demandas que se reseñaron en la parte expositiva de esta sentencia, a la cual nos remitimos.

SEXTO: Que el demandado no evacuó contestación de la demanda en tiempo y forma.

SEPTIMO: Que a folio 26, el demandado evacuó el trámite de la réplica, reiterando todas las argumentaciones fácticas y jurídicas expuestas en el escrito de su demanda.

OCTAVO: Que a folio 28, la parte demandada evacuó el trámite de la dúplica, en los siguientes términos:

Controvierte todas las acciones intentadas en la demanda de autos, por no tener argumentos jurídicos válidos que hagan posible lo latamente expuesto en su escrito.

Manifiesta que el actor solicita la cancelación de la inscripción de su representado, sin reconocerle el legítimo derecho de su propiedad que tiene sobre el 50% de la embarcación, obtenido justamente por la adquisición de ésta al resciliar de común acuerdo el contrato de compraventa celebrado entre las mismas partes.

Indica que la acción subsidiaria de prescripción adquisitiva se enerva con lo expresado en su demanda principal, donde reconoce la inscripción del 50% de la nave a nombre de su representado, razón por la que no se entiende como podría adquirir por prescripción lo que explícitamente reconoce que no es de él, sino del demandado.

Señala que la acción de indemnización de perjuicios planteada en el segundo otrosí de folio 1 no puede prosperar en base al argumento ya señalado, ya que ningún perjuicio ha sufrido el demandante, sólo en su orgullo, ya que querer desconocer el valor a un contrato válidamente celebrado entre las partes como lo fue la resciliación, es sencillamente no



querer aceptar la fuerza de los hechos, y más aún, el valor de un contrato válidamente celebrado hace 12 años.

Concluye solicitando que en mérito de lo expuesto y los artículos que menciona, se tenga por evacuado el trámite de la dúplica.

NOVENO: Que para acreditar los fundamentos de su demanda, el demandante acompañó en autos los siguientes documentos:

1.- Certificado de navegabilidad para nave o artefacto naval menor N°1382786, de la embarcación Ana Luisa, a folio 115.

2.- Seis comprobantes de liquidación de pesca emitidos por la empresa Orizon S.A., respecto de la embarcación Ana Luisa, a folio 115.

3.- Acuerdo privado relativo a la pesca, celebrado entre don Luis Antonio Torres Reyes y la empresa Orizón S.A, con fecha 31 de Octubre de 2011, a folio 115.

4.- Acuerdo privado relativo a la pesca, celebrado entre don Luis Antonio Torres Reyes y la empresa Orizón S.A, con fecha 31 de Octubre de 2013, a folio 115.

5.- Acuerdo privado relativo a la pesca, celebrado entre don Luis Antonio Torres Reyes y la empresa Orizón S.A, con fecha 31 de Octubre de 2014, a folio 115.

6.- Anexo de contrato de suministro de pesca celebrado entre don Luis Antonio Torres Reyes y la empresa Orizón S.A, con fecha 01 de Enero de 2012, a folio 115.

7.- Anexo de contrato de suministro de pesca celebrado entre don Luis Antonio Torres Reyes y la empresa Orizón S.A, con fecha 01 de Enero de 2014, a folio 115.

8.- Ordinario N° 12.210 de fecha 04 de Septiembre de 2014 emitido por la Capitanía de Puerto de Talcahuano, a folio 115.

9.- Carta suscrita por el actor y dirigida a la Capitanía de Puerto de Talcahuano, de fecha 01 de Septiembre de 2014, a folio 115.

10.- Contrato de Embarco de fecha 19 de Febrero de 2006, visado por la Capitanía de Puerto de Talcahuano, a folio 115.

11.- Contrato de compraventa de bienes muebles celebrado entre don Luis Torres Reyes y don Ángel Aranguiz Molina, de fecha 19 de Noviembre de 2014, a folio 115.

12.- Declaraciones de renta y balance tributario de don Luis Torres Reyes, correspondiente al ejercicio comercial de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, a folio 116 y 117.

13.- Diversas facturas de compra ingresadas en la contabilidad del contribuyente don Luis Torres Reyes, correspondiente al ejercicio comercial de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 y 2017, a folio 118 y 120.



14.- Diversas facturas de venta ingresadas en la contabilidad del contribuyente don Luis Torres Reyes, correspondiente al ejercicio comercial de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2017, a folio 121 y 122.

15.- Contrato de compraventa y usufructo respecto de la embarcación Ana Luisa, celebrado entre don Ernesto Torres Osorio, como vendedor, y don Luis Antonio Torres Reyes y don Arcadio de la Cruz Torres Reyes, como compradores, a folio 123.

16.- Contrato de comodato de la embarcación Ana Luisa celebrado entre don Ernesto Torres Osorio y don Luis Antonio Torres Reyes, a folio 123.

17.- Contrato de compraventa de la embarcación Ana Luisa, celebrada entre don Luis Antonio Torres Reyes y don Arcadio de la Cruz Torres Reyes, a folio 123.

18.- Contrato de Mutuo celebrado entre don Luis Antonio Torres Reyes y don Arcadio de la Cruz Torres Reyes, a folio 123.

19.- Certificados de defunción de don Ernesto Torres Osorio y de doña Ana Luisa Reyes Ávila, emitidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación, a folio 123.

20.- Informe de inclinación y análisis estabilidad de la embarcación Ana Luisa, a folio 124.

21.- Informe tributario suscrito por doña Lorena Molina Villagrán, con fecha 11 de Julio de 2018, a folio 124.

22.- Parte del plano de la embarcación Ana Luisa, a folio 124.

23.- Resolución exenta N° 1.763 de fecha 08 de Mayo de 2018, emitida por la Subsecretaría de Pesca, a folio 124.

24.- Copia de escrito de demanda que incidió en la causa C-6532017, radicada en este tribunal, a folio 126.

25.- Copia de contestación a la demanda que incidió en la causa C653-2017, radicada en este tribunal, a folio 126.

26.- Copia de desistimiento de la demanda que incidió en la causa C-6532017, radicada en este tribunal, a folio 126.

27.- Copia de Recurso de Protección interpuesto por don Luis Torres en contra de la Capitanía de Puerto San Vicente, tramitado ante la I. Corte de Apelaciones de Concepción, bajo el rol N° 8.7492016, a folio 126.

28.- Copia de Informe de la Capitanía de Puerto San Vicente en relación al Recurso de Protección referido en el numeral anterior, a folio 126.

29.- Copia del fallo que incidió en el Recurso de Protección, a folio 126.



30.- Copia de la presentación efectuada por don Arcadio de la Cruz Torres Reyes en la causa rol C2.3232015 y radicada en este tribunal, a folio 126.

DECIMO: Que la parte demandada, con el fin de desvirtuar las pretensiones del demandante, acompañó en autos los siguientes documentos:

1.- Contrato de Resciliación de contrato de compraventa, respecto de la nave “Ana Luisa” celebrado entre las partes de esta causa, con fecha 28 de noviembre de 2005, a folio 64.

2.- Certificado de Matrícula de Nave o Artefacto Naval Menor, emitido por el Capitán de Puerto de San Vicente, a folio 64.

3.- Documento emitido por el Servicio Nacional de Pesca, con fecha 06 de noviembre de 2006, a folio 125.

UNDECIMO: Que a folio 112 rola Oficio remitido por la Capitanía de Puerto de San Vicente; a folio 137 rola oficio enviado por la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de San Vicente; y a folio 150 rola oficio remitido por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

DUODECIMO: Que en la dictación de la presente sentencia definitiva se tienen a la vista las causas Rol C-2323-2015 y C-653-2017 del ingreso de este Tribunal.

DECIMO TERCERO: Que a folio 114 la parte demandante rindió prueba testimonial, declarando don Genaro Alberto Navarrete Cartes, don Oscar Alejandro Valenzuela Espinoza, don Víctor Manuel Sanhueza Sandoval, don Víctor Arcadio Placencia Sepúlveda, don Sergio Edgardo Durán Silva, doña Mariela Lucila Ormeño Astete, don José Reinaldo Valenzuela Silva y don Alberto del Carmen Maldonado Miranda, testigos hábiles, no tachados, los que previamente juramentados exponen:

1.- El testigo Genero Alberto Navarrete Cartes, señala que le consta que don Luis es dueño de la embarcación “Ana Luisa”, por cuanto lo conoce hace más de 20 años, ha trabajado con él en calidad de tripulante por 20 años, junto con labores de mantención y pintado y se ha embarcado en la lancha pesquera Ana Luisa. Además la matrícula y el documento que entrega la Gobernación indican que él es el dueño de la embarcación. Por otra parte, él fue presidente de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de San Vicente y entre sus obligaciones debía revisar la documentación de cada nave para ver la cuota de cada embarcación.

Cuenta que cuando terminan la cuota de pesca que se les asigna, su patrón don Luis Torres les encarga las labores de reparar lo dañado de la embarcación y cambio del material



fatigado, labores que realizan los tripulantes, por cuanto se les paga por ello y conocen lo que está fallando, demoran unos 10 a 15 días.

Refiere que ser armador de una embarcación dedicada a la pesca significa ser dueño de ésta y en este caso el armador de la embarcación Ana Luisa es don Luis Torres, quien además está a cargo de ella cuando está embarcada y cuando está en el muelle.

Menciona que conoce a don Arcadio de la Cruz Torres Reyes, el cual es hermano de don Luis. Don Arcadio no ha realizado labor alguna en la embarcación Ana Luisa y fue parte de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de San Vicente con la lancha Angelina, pero en la actualidad no.

Indica que durante el período en que fue presidente de la Asociación Gremial, don Arcadio le entregó documentación relativa a la embarcación Angelina, pero éste nunca le hizo saber que también tenía derechos sobre la embarcación Ana Luisa. Además nunca supo de algún problema entre las partes respecto de la embarcación Ana Luisa, ya que don Luis Torres era dueño de la embarcación Ana Luisa y don Arcadio de la embarcación Angelina.

Expresa que sabe sobre la existencia de un contrato, en el contexto de su calidad de presidente de la asociación, donde revisaba la documentación que se les presentaba, pero no recuerda la fecha, en dicho contrato se le compró el 50% a don Ernesto Torres y el otro 50% a don Arcadio Torres.

Manifiesta que se le causaron perjuicios al demandante, porque lo único que hace don Luis Torres es la pesca y al no salir cayó en depresión.

Comenta que no se embarcó en los años 2015 y 2016, porque la embarcación Ana Luisa no podía zarpar, ya que los certificados de navegabilidad y matrícula los tenía don Arcadio Torres. Lo cual sabe porque como trabajaba con don Luis, él les daba dichas razones. La cuota de pesca de dichos años quedó en el agua y no fue vendida.

2.- El testigo Oscar Alejandro Valenzuela Espinoza, manifiesta que don Luis Reyes es dueño de la embarcación Ana Luisa, lo cual sabe porque lo conoce hace 25 o 30 años y ha trabajado con él embarcado en la lancha Ana Luisa desde hace unos 10 años, menos los años 2015 y 2016, por cuanto no pudieron salir.

Señala que ha realizado labores ajenas a las de tripulante, como reparación del casco, una vez terminada la temporada, en los meses de diciembre o enero, las cuales duran 3 meses más o menos y las de reparación como 10 días y de esto se encarga y los costea don Luis Torres.



Explica que ser armador de una embarcación significa ser dueño de la misma. En este caso es don Luis Torres quien está a cargo de la lancha cuando está embarcada y cuando está en el muelle.

Menciona que conoce a don Arcadio Torres Reyes, el cual no ha realizado actividad alguna en la embarcación Ana Luisa. El cual es dueño de la embarcación Angelina.

Comenta que le causaron perjuicios al demandante, ya que estuvo muy enfermo desde diciembre, le dio una parálisis cerebral y perdió la vista. Toda la vida ha sido pescador y como pescador lo entiende, ya que si se queda encerrado y no puede salir, se enferma.

Agrega que en los años 2015 y 2016 no pudo trabajar con don Luis, porque éste tenía un problema con su hermano y por eso no tenía el certificado de navegabilidad ni matrícula. Lo cual sabe porque don Luis se lo conversó.

3.- El testigo Víctor Manuel Sanhueza Sandoval, expone que conoce a don Luis Torres hace 25 años y sabe que es dueño de la embarcación Ana Luisa, por cuando siempre ha sido pescador artesanal, y es él quien compra todos los víveres, realiza la mantención y mantiene la documentación. Además en diciembre del año 2005 realizó una cena con su familia y amigos para celebrar que había obtenido el 100% de la embarcación Ana Luisa. En dicha celebración les mostró el contrato.

Manifiesta que adquirió el dominio de la embarcación de su padre don Ernesto, quien le cedió el 50% y el otro 50% se lo vendió don Arcadio Torres.

Comenta que entre las partes existían problema, porque don Arcadio no le quería entregar los documentos de Sernapesca, de la Gobernación Marítima y la Matrícula de la embarcación Ana Luisa a don Luis y además presencié una discusión entre éstos, por varios temas y entre ellos el de la embarcación Ana Luisa.

Sostiene que don Luis ha sufrido perjuicios, por cuanto no ha podido salir a trabajar, lo cual le ha generado problemas económicos, perdiendo entre 30 a 40 millones y ha afectado su salud, en el sentido que le dio una parálisis facial y su ojo izquierdo le parpadea.

4.- El testigo Víctor Arcadio Placencia Sepúlveda, expone que conoce a don Luis Torres hace 20 o 25 años, el cual es dueño de la embarcación.

Cuenta que estuvo embarcado en la lancha pesquera Ana Luisa en los años 2017 y 2018, en la temporada de sardina. Además de tripulante ha realizado otras labores una vez terminada la temporada en el periodo de verano antes zarpar, como arreglar las redes y la embarcación. Todas dichas labores las encarga y costea don Luis y duran entre 10 a 15 días.



Explica que ser armador significa ser dueño de la embarcación y en este caso es don Luis, siendo él quien se encarga de ésta cuando están embarcados y en el muelle.

Relata que la embarcación Ana Luisa era de los papás de las partes, la cual quedó como herencia, ahora dicha embarcación es de don Luis, por cuanto los otros hermanos quedaron con otras embarcaciones.

Menciona que conoce a don Arcadio Torres, el cual es hermano de don Luis. Arcadio nunca ha trabajado en la lancha Ana Luisa y tiene su propia embarcación "Angelina".

Indica que don Luis sufrió perjuicios, ya que en los años 2014 y 2015 habló con él y le explicó que no podía zarpar porque tenía un problema con su hermano.

5.- El testigo Sergio Eduardo Durán Silva, expresa que existió un contrato entre las partes entre el año 2006 y 2014, lo cual sabe porque vio dicho contrato y pertenece a la misma asociación donde pertenecen don Luis y don Arcadio. A don Luis lo conoce hace 20 años por medio del Grupo Pelágico, del cual también era parte don Arcadio con su embarcación Angelina.

Refiere que la calidad de dueño de una embarcación se acredita por medio del certificado de navegabilidad y matrícula, los cuales en el caso de la embarcación Ana Luisa están a nombre de don Luis.

Hace presente que don Arcadio nunca pretendió derechos sobre la embarcación Ana Luisa, porque tenía su embarcación Angelina. Además nunca lo vio ejecutar obra alguna en la embarcación Ana Luisa.

Exhibido el documento consistente en Certificado de Matrícula, indica que los propietarios de la embarcación Ana Luisa son don Luis Torres y don Arcadio Torres.

Sostiene que el actor tuvo perjuicios de índole económico en unos 40 millones de pesos aproximadamente y problemas de salud consistentes en parálisis facial y en un ojo.

Cuenta que don Luis no pudo zarpar los años 2015 y 2016, porque tuvo problemas con don Arcadio, quien no le entregaba el certificado de navegabilidad y matrícula, lo cual sabe porque estaba presente cuando don Luis pidió un duplicado de éstos.

6.- La testigo Mariela Lucila Ormeño Astete, menciona que don Luis le compró parte de la embarcación Ana Luisa a don Arcadio Torres en diciembre de 2005, ya que el papá le había dejado el 50% a don Arcadio y éste se lo vendió a don Luis. El otro 50% lo obtuvo directamente de su papá. Lo anterior lo sabe por conversaciones que escuchó.

Hace presente que don Luis se dedica a la pesca artesanal, para lo cual utiliza la embarcación Ana Luisa.



Cuenta que existieron problemas entre las partes respecto del referido contrato, por cuanto estuvo presente en una de sus discusiones, donde hablaban sobre el falso documento que don Arcadio hizo firmar a don Luis.

7.- El testigo José Reinaldo Valenzuela Silva, expresa que don Luis Torres es dueño de la embarcación Ana Luisa, lo cual sabe porque conoce a la familia hace años y siempre ha visto a don Luis en la embarcación, siendo él quien se preocupa por su mantención y todo lo demás.

Relata que conoce a don Luis hace 30 años y ha trabajado como tripulante en la embarcación Ana Luisa hace 5 años. Además ha realizado otras labores como mantención, reparación y pintura cuando termina la temporada de pesca, labores que tardan entre 15 a 20 días más o menos. Dichas reparaciones son ordenadas y pagadas por don Luis, quien es el armador y dueño de dicha embarcación. Por otra parte es don Luis quien se hace cargo de la embarcación cuando están embarcados y cuando está en el muelle.

Añade que conoce a don Arcadio Torres, el cual es hermano de don Luis. A don Arcadio nunca lo ha visto realizar alguna labor en la embarcación Ana Luisa.

Expone que en los últimos zarpes ha visto a don Luis deprimido, antes era muy alegre.

Refiere que en los años 2015 y 2015 la embarcación Ana Luisa no pudo zarpar, ya que tenía un problema con unos documentos que tenía don Arcadio, lo cual sabe por rumores.

8.- El testigo Alberto del Carmen Maldonado Miranda, señala que don Luis es el dueño de la embarcación Ana Luisa, lo cual sabe porque lo conoce hace más de treinta años por razones laborales.

Indica que ha sido tripulante de la embarcación Ana Luisa los años 2017 y 2018. Además ha realizado otras labores como pintado, galletado, reparación de lancha, espejos, mástiles, plumas, aparejos, etc, las cuales hacen después de la pesca de sardinas durante 15 a 20 días. Dichas reparaciones son encargadas y pagadas por el armador Luis Torres, el cual es dueño de la embarcación, quien además se hace cargo de ella cuando está embarcada y cuando está en el muelle.

Añade que conoce a don Arcadio Torres, el cual es hermano de don Luis. Don Arcadio no ha realizado labor alguna en la embarcación Ana Luisa y es dueño de la embarcación Angelina.



DECIMO CUARTO: Que a folio 119, la parte demandada rindió prueba testimonial, declarando don Rodrigo Eduardo Chávez Sepúlveda y don Pedro Marcial Rojas Torres, testigos hábiles, no tachados, quienes dan razón de sus dichos y exponen:

1.- El testigo Rodrigo Eduardo Chávez Sepúlveda, expresa que conoce a ambas partes de este juicio desde el año 2000 más o menos, porque todos trabajan en la pesca artesanal.

Dice que tiene conocimiento de que son los dos dueños de la embarcación Ana Luisa, porque es un hecho que se comenta entre los pescadores.

Explica que con el documento que entrega la Gobernación Marítima al momento de inscribir la embarcación, se acredita que se es propietario de una embarcación. En este caso ha visto dicho documento. Exhibido el documento acompañado el 02 de abril de 2018, señala que éste corresponde al documento que ha visto respecto de la propiedad de la embarcación y corresponde al Certificado de Matrícula.

Comenta que ha realizado trabajos de soldadura en la embarcación Ana Luisa entre los años 2015 y 2016, por lo cual don Luis le pagó la suma de \$1.500.000.-.

Agrega que la embarcación no ha parado de trabajar, él igual seguía trabajando.

2.- El testigo Pedro Marcial Rojas Torres, manifiesta que por lo que tiene entendido los dueños de la embarcación Ana Luisa son don Luis y don Arcadio.

Cree que existen perjuicios, por cuanto su padre les dejó la embarcación a los dos hijos para que la trabajen al 50% cada uno.

DECIMO QUINTO: Que en cuanto a la confesional de folio 138, el absolvente Arcadio de la Cruz Torrez Reyes, expuso al tenor del pliego de posiciones que ser armador de una embarcación pesquera significa ser el dueño de dicha embarcación. Existe similitud entre ser dueño y armador de una embarcación pesquera, en el sentido de que ser armador es ser representante dentro de la entidad marítima y Sernapesca; y ser dueño significa figurar a través de un representante en Sernapesca o en la Gobernación Marítima.

Indica que fue el fundador de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales San Vicente de Talcahuano hace unos 20 años, ya que pertenece desde antes que naciera la organización pelágica, donde realizaban otras actividades. La Ley de Pesca establecía ciertas formas de proceder dentro de la actividad pesquera, dentro de ella había dos modalidades, individual o como comunidad aparecen dos y uno de ellos como representante legal ante la entidad pesquera.

Refiere que la pesquera Orizon S.A. le entregó unas toneladas, las cuales fueron capturadas, ya que esa era la finalidad y no otra, pero considera que esto no tiene conexión



alguna con este juicio. No tiene precisión de la utilidad que le reportó dicha cesión, ya que debe multiplicar y sacar cuentas.

Comenta que él hizo el cambio de propietario de la embarcación Ana Luisa, por cuanto Luis Torres lo desvinculó de su derecho al 50%, él lo único que hizo fue proteger ese 50% que le pertenecía.

Dice que aparece inscrito en el Registro de Pescadores Artesanales con la embarcación Angelina, más nunca ha estado inscrito en dicho registro con la embarcación Ana Luisa.

Menciona que fue parte del grupo que trabajaba en la embarcación Ana Luisa, por lo que recibía remuneración como flota, él hacía la parte administrativa por muchos años y también porque su papá los dejó como dueños a ambos. No recuerda los montos, por cuanto eso fue de mucho antes, del 2003.

Señala que no se firmaron en la misma Notaría ambos contratos, don Rodrigo Pavón era el nombre del abogado que redactó dichos contratos.

Indica que ellos son dueños del 50% cada uno, por lo tanto las reparaciones que se hacen de manera periódica todos los años son pagadas de lo que produce la embarcación, lo cual es de los dos.

Manifiesta que don Luis en la causa Rol 653-2017 radicada en el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano lo demandó para la entrega material del certificado de Navegabilidad y Certificado de Matrícula de la embarcación Ana Luisa.

Cuenta que él era flota y dentro de dicha actividad hacía todas las gestiones, incluso los zarpes, entre los años 2003 o 2004 hasta el 2012, porque ahí don Luis lo desvinculó de dicha responsabilidad.

Explica que la calidad de dueño de una embarcación se demuestra con el Certificado de Matrícula.

DECIMO SEXTO: Que en cuanto a la confesional de folio 83, el absolvente don Luis Antonio Torres Reyes, al tenor del pliego de posiciones señala que la nave “Ana Luisa”, matrícula N°364, se encuentra inscrita en el Registro Pesquero de Naves Menores de San Vicente.

Indica que no sabe sobre la existencia del documento denominado Resciliación de Contrato de Compraventa de Embarcación Menor celebrado entre las partes de este juicio. Exhibido dicho documento, reconoce su firma puesta al final de éste, el cual fue firmado ante Notario Público. No recuerda sobre este documento, porque cuando se embarca, su



hermano hacía las labores de documentaciones, previos poderes que le daba. Este documento es tramposo, no siendo efectivo lo que este documento señala.

Exhibido el documento denominado “Certificado de Matrícula de Nave o Artefacto Naval Menor”, refiere que no es efectivo que las partes de este juicio sean los propietarios de la embarcación “Ana Luisa”.

Menciona que solo hasta el año 2005 las partes fueron propietarios del 50% cada uno de la embarcación “Ana Luisa”.

Manifiesta que se le han causado muchos perjuicios, porque es un documento impuesto maliciosamente.

Refiere que no es efectivo que desde el documento denominado Resciliación ambas partes hayan tenido la posesión y dominio de la embarcación “Ana Luisa”.

Sostiene que él es el dueño del 100% de la embarcación Ana Luisa, porque el demandado le vendió el 50% de la embarcación en el año 2005 y tomó posesión de la nave y fue el representante legal en todas partes como dueño en el Servicio de Impuestos Internos, Sernap, etc. Por la razón anterior, se ha dejado todas las utilidades de dicha nave desde el año 2005, no entregándole a su hermano.

DECIMO SEPTIMO: Que, conforme a lo dicho, la materia principal a dilucidar radica en la pretensión del actor de que se cancele parcialmente la inscripción de fojas 64, N°4 del Registro de Matrícula de Naves Menores a cargo de la Capitanía de Puerto de San Vicente, respecto de la lancha pesquera “Ana Luisa”, eliminando de ella como propietario a don Arcadio de la Cruz Torres Reyes, quedando en dicho Registro como único propietario don Luis Antonio Torres Reyes.

DECIMO OCTAVO: Que de los antecedentes consignados en la presente sentencia es posible dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que con fecha 06 de septiembre de 1991 se inscribe la L/M “Ana Luisa” de propiedad de don Ernesto Torres Osorio.

2.- Que con fecha 12 de julio de 1999 el Sr. Ernesto Torres Osorio vende, cede y transfiere por partes iguales la L/M “Ana Luisa” al Sr. Luis Torres Reyes y al Sr. Arcadio Torres Reyes.

3.- Que con fecha 23 de noviembre de 2005, don Arcadio Torres Reyes, vende, cede, transfiere y enajena la L/M “Ana Luisa” a don Luis Torres Reyes, quien adquiere la totalidad de los derechos de la embarcación.

4.- Que con fecha 25 de septiembre de 2014, de acuerdo a Resciliación de Contrato de Compraventa de Embarcación, se rescilia y se deja sin efecto contrato de compraventa



de fecha 23 de noviembre de 2005, donde don Arcadio Torres vendió, cedió, transfirió y enajenó dicha nave a don Luis Torres, volviendo a ser ambos propietarios de la misma por iguales partes.

5.- Que la embarcación “Ana Luisa”, Matrícula N°364, se encuentra inscrita a fojas: 64, del libro de Registro de Matrícula de Naves Menores: 4 de la Capitanía de Puerto de San Vicente a nombre de don Luis Antonio Torres Reyes y don Arcadio de la Cruz Torres Reyes.

DECIMO NOVENO: Que en aras de resolver la acción incoada conviene tener presente que el artículo 4 del Decreto 163, Reglamento de Registro de Naves y Artefactos Navales, establece que *“Toda nave o artefacto naval perteneciente a una persona natural o jurídica chilena, deberá inscribirse en alguno de los Registros de Matrícula indicados en el artículo 2° de este Reglamento. Asimismo, deberá anotarse al margen de la respectiva inscripción en el registro correspondiente, bajo sanción de ser inoponible a terceros, toda transferencia o transmisión de dominio que afecte a alguna nave o artefacto naval que ya se encuentre matriculado.”*

Por su parte el artículo 2 letra b) señala: *“La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, llevará los siguientes Registros: Registro de Matrícula de Naves Menores”*

Luego el artículo 9 del mismo Decreto indica que *“Presentados los títulos para su inscripción, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 43 del decreto ley N° 2.222, de 1978, y conformándose ellos y los demás documentos requeridos a las exigencias legales y reglamentarias, deberá practicarse la inscripción solicitada, sin más trámite.*

El Director General no dará curso a las inscripciones solicitadas, si en algún sentido son legal o reglamentariamente inadmisibles; como, por ejemplo si los títulos no son auténticos; si el propietario de una nave no cumple con los requisitos exigidos por los artículos 11 y 12 del decreto ley N° 2.222, de 1978; si aparece en el título algún vicio o defecto que lo anule absolutamente; o si no contiene las menciones necesarias para efectuar la inscripción.

Asimismo, el Director General no inscribirá una nave, si el dueño de ésta la vendiere sucesivamente a dos o más personas distintas y después de inscrita por uno de los compradores, apareciere otro solicitando igual inscripción; o si una nave apareciere vendida por quien según el registro no es su dueño o actual poseedor.”

En el presente caso se ha dado cumplimiento estricto a la normativa previamente indicada, por cuanto consta mediante el Certificado de Matrícula de Nave o Artefacto Naval Menor que la L/M “Ana Luisa”, se encuentra inscrita a fojas 64 del Libro de Matrícula de



Naves Menores: 4 de la Capitanía de Puerto de San Vicente, figurado como propietarios don Luis Antonio Torres Reyes y don Arcadio de la Cruz Torres Reyes.

VIGÉSIMO: Que como se dijo, el actor busca por medio de esta acción que se cancele parcialmente la mencionada inscripción, en el sentido de eliminar como propietario a don Arcadio Torres Reyes, quedando como único y exclusivo propietario don Luis Torres, por lo cual se debe tener presente cuáles son las causales de cancelación de inscripción estatuidas por la Ley.

Sobre este punto el Decreto Ley 2.222, establece expresamente en su artículo 21 que: *“Las inscripciones de naves en el Registro de Matrícula se cancelarán, de oficio o a petición de parte, por las siguientes causales:*

- 1. Por dejar de cumplir sus propietarios los requisitos exigidos en el artículo 11;*
- 2. Por declaración de innavegabilidad absoluta o pérdida total comprobada;*
- 3. Por desguace;*
- 4. Por presunción fundada de su pérdida, al no tenerse noticias de su paradero por un lapso superior a cuatro meses, previa investigación sumaria;*
- 5. Por enajenación al extranjero. La Autoridad Marítima no autorizará la cancelación por esta causa, si no consta por escritura pública el consentimiento de todos los beneficiarios de las hipotecas y demás derechos reales que recaigan sobre la nave, y el alzamiento de las prohibiciones legales o judiciales que impidan su transferencia.*

Tampoco podrá cancelarse la matrícula de naves mercantes, cuya enajenación esté sujeta a previa autorización del Presidente de la República, sin que esta autorización se haya concedido;

- 6. Por cambio de bandera, salvo lo previsto en el inciso final del artículo 14;*
- 7. Por apresamiento, conforme a las normas del derecho internacional;*
- 8. Por cambio de nombre de la nave o por alteraciones en su casco que aumenten o disminuyan su tonelaje, y*
- 9. Por infringir los propietarios o los operadores, en el caso de las naves a que se refiere el inciso tercero del artículo 11, las normas especiales restrictivas de operación que les haya impartido el Director.*

En el caso de marras, el actor no señaló específicamente, ni sus argumentos dicen relación con las causales antes mencionadas y que hacen procedente la cancelación de una Inscripción en el Registro de Matrícula de Naves Menores, motivo suficientes para rechazar la acción esgrimida.



VIGESIMO PRIMERO: Que respecto a los fundamentos de la demanda en estudio, Éstos dicen relación, en primer lugar, con el hecho de que el contrato de resciliación que sustenta la inscripción a nombre del demandado, es falso; y en segundo lugar, en el hecho de que el actor ha tenido la posesión tranquila e ininterrumpida por más de 5 años, ejerciendo sobre la nave en cuestión actos de señor y dueño.

En cuanto al primero de los fundamentos esgrimidos, cabe mencionar que el contrato de resciliación en virtud del cual se practicó la inscripción a nombre de don Arcadio de la Cruz Torres Reyes, dejándolo en calidad de propietario junto con el demandante de la embarcación Ana Luisa, es plenamente válido, por cuanto no ha sido declarada su nulidad, ni tampoco fue solicitada en autos previamente a la solicitud de cancelación de inscripción, por lo que dicha alegación se tendrá por desestimada.

En relación al segundo de los argumentos entregados, cabe señalar que el solo hecho de poseer una embarcación por un determinado lapso de tiempo, no es causal de cancelación de inscripción, así como tampoco opera de pleno derecho la prescripción adquisitiva de dicho bien, debiendo ésta ser declarada previamente, si es que procediere, lo cual en el caso de autos no ha acontecido. Por lo anterior, se rechazará de igual forma dicha alegación.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que como se ha venido diciendo, la acción principal incoada en autos no se sustenta en alguna de las causales legales que hacen procedente la cancelación de la inscripción de Matrícula solicitada, así como tampoco los argumentos esgrimidos dicen relación con éstas, por lo que solo cabe rechazar la demanda como se dirá en la parte resolutive de esta sentencia.

VIGÉSIMO TERCERO: Que en subsidio de la acción principal, el actor dedujo demanda de prescripción adquisitiva, sustentada en el hecho de que reunió en su patrimonio el 100% de los derechos sobre la nuda propiedad de la embarcación “Ana Luisa”, luego de que don Ernesto Torres Osorio le transfiriera el 50% de los derechos por compraventa de fecha 12 de julio de 1999; y el otro 50% mediante transferencia de don Arcadio Torres Reyes, con fecha 23 de noviembre de 2005, adquiriendo finalmente la propiedad plena luego del fallecimiento de los usufructuarios. Por lo anterior, refiere que desde el año 2006 ha poseído la embarcación “Ana Luisa” con ánimo de señor y dueño, realizado respecto de ella actos positivos de posesión.

Como se puede vislumbrar, el actor sustenta su acción en primer término el hecho de ser propietario de la embarcación “Ana Luisa” y en segundo lugar en el hecho de ser poseedor de la misma.



VIGESIMO CUARTO: Que cabe recordar que en materia de prescripción de naves no existe reglamentación exclusiva, por lo cual hay que estarse a lo dispuesto en el artículo 836 del Código de Comercio que establece que “La adquisición de una nave por prescripción se regirá por las reglas relativas a los inmuebles.”, de esta manera, se resolverá la presente acción conforme a las normas establecidas para la prescripción de bienes inmuebles.

Para resolver la controversia planteada, se debe tener presente que el artículo 2.492 del Código Civil, en relación con la prescripción adquisitiva que es la interpuesta en la especie, establece que ella es un modo de adquirir las cosas ajenas por haberlas poseído durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Nuestro Código Civil no define los modos de adquirir, ha sido la doctrina quien ha señalado que son hechos jurídicos a los que la ley atribuye la virtud de hacer nacer o traspasar el dominio. Lo que si hace el artículo 588 del Código Civil es enumerarlos (ocupación, accesión, tradición, sucesión por causa de muerte y prescripción). Ahora bien, si el derecho nace para el adquirente con independencia a cualquier derecho de otra persona sobre la cosa, se indica que el título es originario. Es el caso de la ocupación, la accesión y la prescripción adquisitiva, en el caso de esta última, porque el citado artículo 2.492 indica que mediante ella se *adquieren cosas ajenas*.

VIGÉSIMO QUINTO: Que siendo la prescripción adquisitiva un modo originario de adquirir el dominio, a través de él se constituye el dominio, no se le declara, porque el declararlo implica que éste ya existe, y sólo se le constata. Lo recién dicho es ya un obstáculo para acceder a la demanda en la forma que fue planteada, porque en todo momento el demandante explica y argumenta que tiene supuestamente la propiedad plena del 100% de la embarcación. A lo anterior hay que agregar, que el citado artículo 2.492 del Código Civil expresa y categóricamente indica, que la prescripción es un modo de adquirir las “cosas ajenas”, y en la demanda el actor claramente indica que ya es dueño exclusivo de la embarcación, teniendo justo título, lo que torna en ilógico e improcedente declarar que ha adquirido por prescripción un bien del que ya es dueño. Dicho de otra forma, siendo ya supuestamente propietario de un bien, no hay prescripción adquisitiva ordinaria, menos en favor de la misma persona.

VIGESIMO SEXTO: Que por otra parte, el actor sustenta la presente acción en los argumentos ya esgrimidos en la acción principal, los cuales de igual modo hacen alusión a que tiene el dominio pleno de la embarcación sub lite.

VIGESIMO SEPTIMO: Que si bien el actor sustenta su acción en el hecho de ser propietario pleno de la embarcación “Ana Luisa” (fundamento suficiente para rechazar esta



acción), no es menos cierto que dicha circunstancia efectivamente existió en los hechos, por cuanto consta en autos que durante el período comprendido entre año 2005 hasta el 25 de septiembre de 2014, figuraba como propietario exclusivo de dicha embarcación, en el libro de Registro de Matrículas de Naves Menores. Sin embargo, desde el 25 de septiembre de 2014, de acuerdo a la inscripción de la Resciliación de Contrato de Compraventa de Embarcación, dejó de ser propietario y poseedor inscrito del 50% de la embarcación, por cancelación de su inscripción, pasando a ser “ajenas”, dichas acciones y derechos.

VIGESIMO OCTAVO: Que una vez practicada la inscripción de la resciliación de Contrato de Compraventa de Embarcación, el actor continuó siendo propietario y poseedor del 50% de la nave y el demandado pasó a ser propietario inscrito del otro 50%, por lo que dicha parte es ajena para el demandante, la cual posiblemente puede poseer, si fuese posible dicha circunstancia, pudiendo eventualmente ser procedente la acción impetrada si se cumplen los requisitos para su procedencia.

Tres son los requisitos de procedencia la prescripción adquisitiva, a saber: 1) una cosa susceptible de esta prescripción; 2) existencia de posesión, y 3) transcurso del plazo exigido por la ley.

En cuanto al primer requisito, la regla general es que las cosas sean susceptibles de adquirirse por prescripción; sólo por excepción hay cosas imprescriptibles. En el caso sub júdice, se pretende ganar por prescripción adquisitiva el 50% del bien considerado por la ley como inmueble, lo que no se encuentra excluido por el legislador, de forma tal que debe concluirse que concurre el primer requisito para que opere dicha institución. Además, el artículo 2508 del Código Civil expresamente dispone que pueden adquirirse por prescripción los bienes raíces y por ende las embarcaciones, según el artículo 836 del Código de Comercio.

VIGÉSIMO NOVENO: Que en relación al segundo requisito, esto es, la posesión con ánimo de señor y dueño, el actor invoca la posesión regular sustentada en que sus justos títulos serían el contrato de compraventa de fecha 27 de febrero de 1999 y el contrato de compraventa de fecha 23 de noviembre de 2005 y que desde el fallecimiento de los usufructuarios, ha ejecutado las facultades de uso y goce de buena fe.

TRIGÉSIMO: Que tratándose la embarcación de autos de un bien que se asemeja a un bien raíz inscrito, debe aplicarse el artículo 724 del Código Civil, norma que dispone que “si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por inscripción en el Registro Conservador, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio”. En armonía con dicha disposición, el artículo 728 del mismo Código establece que “para que cese la



posesión inscrita, es necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes, o por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiera su derecho a otro, o por decreto judicial”, agrega dicha norma que “Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito, no adquiere posesión de ella, ni pone fin a la posesión existente”, en el mismo sentido el artículo 924 dispone que la posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción. Como corolario, contra título inscrito sólo puede alegarse la prescripción si se invoca otro título inscrito; en efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2505 del Código Civil, contra título inscrito no tendrá lugar la prescripción adquisitiva de este tipo de bien, o de derechos reales constituidos en éstos, sino en virtud de otro título inscrito; ni empezará a correr sino desde la inscripción del segundo.

El mandato del artículo 2505 es absoluto y no reconoce excepciones, se refiere a la prescripción ordinaria y a la extraordinaria, pues en tanto la prescripción presupone la posesión, no podrá prescribir aquel que no posea y, al tenor de la preceptiva ya señalada, no posee aquel que no cuenta con título inscrito.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, en el caso de marras, con el mérito del certificado de Matricula de Nave o Artefacto Naval Menor, que hace plena prueba de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1700 del Código Civil, se concluye que la nave “Ana Luisa, Matrícula N°364, se halla inscrita a nombre del demandante y demandado de autos a fs.64 bajo el n°4 del Libro de Registro de Matrícula de Naves Menores de la Capitanía de Puerto de San Vicente. De forma tal, que habiéndose cancelado la inscripción en virtud de la cual amparaba el actor su posesión, por la inscripción del contrato de resciliación a nombre de ambas partes, es inconcuso que no concurre el requisito de la posesión a su respecto, por lo que la demanda intentada no puede prosperar.

En otras palabras, en el momento en que se produjo la inscripción del contrato de resciliación, el actor continuó siendo dueño y poseedor del 50% de la embarcación y el demandado del otro 50%, por lo que al encontrarse inscritos los derechos del demandado, era éste quien tenía la posesión de su 50% y no el actor, y por ende al no tener la posesión, no puede adquirir por prescripción, por cuanto le falta el segundo requisito de procedencia de la acción impetrada.

Así las cosas, sólo cabe rechazar la acción incoada, como se dirá en la parte resolutive de esta sentencia.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que no se emitirá pronunciamiento respecto del último requisito de la acción intentada por ser ello innecesario, al no concurrir el segundo de ellos.



TRIGÉSIMO TERCERO: Que corresponde ahora avocarse al estudio de la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual deducida por el actor, la cual sustenta en el hecho de que el demandado ejecutó varias conductas ilícitas, que constituyen vulneración de diversas normas legales, que hacen surgir responsabilidad en los perjuicios sufridos por él, puesto que su accionar implicó un abuso del derecho, ocasionando un grave daño a su patrimonio material y moral. La primera conducta que le imputa al demandado consiste en el hecho de que éste por medio de un engaño obtuvo su firma en el documento denominado “Resciliación de contrato de compraventa”, el cual mantuvo oculto y lo sacó a la luz sólo 9 días antes de cumplirse los 10 años desde que se firmó; En segundo lugar, sostiene que el demandado no realizó oportunamente los trámites de rigor que deben cumplirse ante un contrato válido, específicamente haber presentado la resciliación ante la autoridad marítima pertinente dando certeza y publicidad a ese acto; otro hecho que le imputa al demandado consiste en que guardó para sí el Certificado de Matrícula, impidiendo que pudiera zarpar los años 2015 y 2016; y finalmente le imputa el hecho de que por su conducta dolosa la embarcación “Ana Luisa” aparece en la lista de causal de caducidad por el tema de la vigencia del certificado de navegabilidad.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que para que opere la responsabilidad extracontractual como la que se persigue en autos, el artículo 2314 del Código Civil exige como requisitos copulativos, la existencia de una acción u omisión dolosa o culposa, que la persona que lo cometió por acción u omisión sea responsable de su ocurrencia; que el hecho en cuestión haya ocasionado daño al demandante; y que exista una relación de causalidad entre el hecho y el daño referido.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 2314 del Código Civil, el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito; a su vez, el artículo 2329 del mismo texto legal prescribe que por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que en cuanto al primero de los requisitos de procedencia de la acción enderezada, esto es, la acción u omisión dolosa o culposa imputable al demandado, cabe señalar que de la simple lectura de los argumentos entregados por el actor, es posible advertir que las conductas que se le atribuyen a la parte demandada no revisten la entidad de un ilícito civil, de los cuales necesariamente se genere responsabilidad



extracontractual, que amerite en consecuencia, una condena a pagar la indemnización por daños materiales y morales, que se solicita.

En relación al primer hecho imputable, cabe señalar que el contrato de resciliación de contrato de compraventa de embarcación, suscrito entre las partes, es perfectamente válido, ya que no ha sido declarada judicialmente su nulidad, por lo que alegar cualquier vicio en esta etapa resulta del todo improcedente.

En cuanto a la alegación consistente en que no se habría inscrito de inmediato en el Libro de Registro de Matrícula de embarcaciones menores de inmediato el contrato ya mencionado, resulta pertinente mencionar que dicha omisión no constituye un ilícito civil que deba ser indemnizado, más aun teniendo en cuenta que la única sanción que la ley atribuye a la falta de inscripción consiste en que dicha transferencia o transmisión de dominio es inoponible a terceros (artículo 4 Decreto N°163).

Respecto de las últimas conductas imputables al demandado, cabe indicar que éstas constituyen acciones que no se encuentran prohibidas por la ley o que la ley sancione, lo que trae como consecuencia que éstas no revisten el carácter de ilícito civil.

Así las cosas, es posible determinar que no concurre el primero de los requisitos de procedencia de la acción presentada y por ende ésta debe ser rechazada, como se dirá en lo resolutivo de este fallo.

No se emitirá pronunciamiento en cuanto a los demás requisitos de procedencia de la acción intentada, por ser ello innecesario al no concurrir el primero de ellos.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que la demás prueba acompañada y rendida en autos, en nada altera las conclusiones a las cuales ha arribado este sentenciador.

Por estas consideraciones, Y VISTO, además, lo dispuesto por la Ley 18.892; Decreto 163, Decreto Ley N°2.222; 1698, 1699, 2314 y 2329 del Código Civil; 170, 341, 346 del Código de Procedimiento Civil, SE DECLARA:

EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE DOCUMENTOS:

Que se rechazan, sin costas, las objeciones de documentos interpuestas por el demandado a folio 1 y 2 del cuaderno de objeción de documentos, respecto de la prueba documental acompañada por el actor a folio 115 y 124.

EN CUANTO AL FONDO:



I.- Que SE RECHAZA, en todas sus partes, la demanda principal sobre cancelación de inscripción interpuesta a folio 1 por don José Francisco Lira Fernández en representación de don LUIS ANTONIO TORRES REYES en contra don ARCADIO DE LA CRUZ TORRES REYES.

II.- Que SE RECHAZA, la demanda subsidiaria de prescripción adquisitiva, incoada en el primer otrosí de folio 1 por don José Francisco Lira Fernández en representación de don LUIS ANTONIO TORRES REYES en contra don ARCADIO DE LA CRUZ TORRES REYES.

III.- Que SE DESESTIMA, la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual interpuesta en el segundo otrosí de folio 1 por don José Francisco Lira Fernández en representación de don LUIS ANTONIO TORRES REYES en contra don ARCADIO DE LA CRUZ TORRES REYES.

IV.- Que no se condena en costas a la parte demandante, por estimar el Tribunal que tuvo motivos plausibles para litigar.

Anótese, regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1714-2017

Dictada por don JORGE TORRES FUENTES, Juez Titular del Primer Juzgado Civil de Talcahuano.

